



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018).

Medio de control: Ejecutivo
Radicado: 15001 33 33 004 **2017 00052 00**
Demandante: OLGA MARÍA MEDINA DE PARRA
Demandado: UGPP

Revisado el expediente se observa que la apoderada de la entidad ejecutada en escrito visible a folios 76 a 88, interpuso y sustentó recurso de reposición contra el auto mediante el cual se libró mandamiento ejecutivo.

Los argumentos expuestos en el recurso son los siguientes:

En la sentencia que sirve de título ejecutivo en la presente acción no se establece en forma clara y concreta la cuantía a cancelar por lo que no existe claridad en cuanto a la obligación que se pretende cumplir, como quiera que la sentencia se profirió en abstracto, implicaba iniciar incidente de liquidación por condena en abstracto, pues no es posible ejecutar la sentencia por indeterminación de la obligación, así que se debió rechazar la demanda por no tramitarse dicho incidente.

No es la UGPP, la entidad encargada de reconocer, liquidar y pagar intereses moratorios, en el entendido que esta entidad no sucedió procesalmente a CAJANAL EICE en el pago de las obligaciones insolutas contenidas en títulos ejecutivos judiciales, pues CAJANAL debe ser la entidad condenada a dicho pago, por ende deben ser obligaciones atendidas por los patrimonios autónomos que se constituyeron para tal fin, y bajo ese entendido el título ejecutivo objeto de recaudo no le es oponible a la entidad demandada.

La apoderada propuso las excepciones denominadas “caducidad de la acción ejecutiva”, “inexistencia del título frente a los intereses moratorios”, “no existencia de título ejecutivo idóneo para fundamentar el mandamiento de pago”, e “inexistencia de una obligación, clara expresa y exigible”, “falta de legitimación en la causa por pasiva” e “incompetencia del juez”; frente a las cuales argumenta lo siguiente:

- Caducidad de la Acción Ejecutiva

Manifiesta que según el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012 que modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, las Leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir, y la demanda ejecutiva que se presenta en vigencia de la ley 1437 de 2011 debe atender al inciso 2 del artículo 299 de la misma Ley que consagra el término del 10 meses después de la sentencia para que el título sea ejecutable.

Igualmente señala que si la demanda fue presentada en el tránsito normativo del Decreto 01 de 1984, debe hacerse exigible luego de los 18 meses contados a partir de la ejecutoria de la sentencia conforme lo prevé el artículo 177 ibidem.

En esa medida, señala la sentencia base de la ejecución cobró ejecutoria el 21 de julio de 2008, luego su exigibilidad se dio a partir del 21 de enero de 2010, de manera que el plazo para presentar la acción vencía el 21 de enero de 2015 y fue presentada hasta el 19 de abril de 2017.

Manifestó que no comparte el sentir del Despacho, según el cual se suspendieron los términos por la liquidación de Cajanal, de acuerdo a lo manifestado por el Consejo de Estado en proveído de 30 de junio de 2016, ya que la Caja Nacional de Previsión Social fue una entidad del orden nacional, por lo que a la luz de lo dispuesto en la Ley 490 de 1998, no le resulta aplicable la Ley 550 de 1999.

Aseguró que en el Decreto Ley 254 de 2000, no se estableció la posibilidad de suspender por caducidad o prescripción las obligaciones a cargo de las entidades objeto de liquidación, y si bien existen sendos pronunciamientos del H. Consejo de Estado frente al tema bajo estudio, lo cierto es que no han sido criterios de unificación por dicho órgano.

- Inexistencia del Título Frente a los Intereses Moratorios.

Alude que la entidad vencida en juicio fue CAJANAL EICE hoy liquidada y que el demandante reclama intereses moratorios de acuerdo al contenido del artículo 177 del C.C.A., sin que hubiese presentado de manera oportuna la solicitud de pago, la cual debió radicar dentro de los 3 meses siguientes a la ejecutoria conforme dispone el artículo 192 del C.P.A.C.A., por lo que considera que no hay lugar al reconocimiento de intereses moratorios.

- No existencia de título ejecutivo idóneo para fundamentar el mandamiento de pago.

El título ejecutivo está constituido por la copia de la sentencia y su constancia de ejecutoria, y se debe presentar además, para demostrar el incumplimiento que se arguye, copias de las resoluciones expedidas por CAJANAL para dar cumplimiento a la obligación, liquidación de intereses moratorios, copia del desprendible de pago y copia de la petición de cumplimiento de sentencia. Frente a lo cual destaca que los atributos que exige un título ejecutivo, los intenta demostrar el demandante a través de un conjunto de documentos encaminados a demostrar un título ejecutivo complejo; por lo que considera que el título que sirve de base para la ejecución no procede contra la UGPP dado que en la sentencia se condena a CAJANAL EICE hoy liquidada, por lo que la UGPP no es el deudor.

- Inexistencia de una obligación, clara, expresa y exigible

La orden impartida en la sentencia que se allegó como título ejecutivo, por sí misma no presta mérito ejecutivo, dado que la obligación de reconocimiento de intereses sobre supuestos valores debidos, se encuentra condicionada a que los mismos efectivamente se causen.

En ese sentido indicó que la sentencia debe integrarse con otros documentos que permitan establecer la configuración de una obligación clara, expresa y exigible de reconocer valores debidos en favor del ejecutante.

- **Falta de legitimación en la causa por pasiva**

Advierte que existe el Patrimonio Autónomo de Remanentes de Cajanal EICE en Liquidación, que es ante quien debe acudir el demandante a fin de satisfacer sus pretensiones insolutas.

También señala respecto de los intereses moratorios, que ni el art. 17 de la ley 6 de 1945, ni el art. 156 de la ley 1151 de 2007, ni el decreto 4269 de 2011, refieren competencia a la UGPP en este asunto.

Concluye que la UGPP no se encuentra legitimada en la causa por pasiva, por cuanto no es a quien le corresponde expedir y notificar los actos administrativos que resolvieron las reclamaciones o dieron cumplimiento a las sentencias judiciales presentadas ante el proceso liquidatorio de CAJANAL E.I.C.E., y de otro lado no fue a quien el Gobierno Nacional le encomendó el pago de ese tipo de obligaciones. Para resaltar su argumentación, cita el concepto del Consejo de Estado de la Sala de Consulta y Servicio civil, de 2 de octubre de 2014, el cual dirime un conflicto de competencias administrativas.

- **Incompetencia del Juez.**

Expresa que el Juez no puede asumir el conocimiento de este tipo de asuntos, por cuanto su naturaleza está reservada al proceso liquidatorio, teniendo en cuenta que la sentencia quedó ejecutoriada y prestó mérito ejecutivo desde el 21 de julio de 2008 y CAJANAL EICE se liquidó el 11 de junio de 2013.

TRASLADO DE RECURSO (fl. 133)

Dentro del término de traslado la parte demandante guardó silencio.

PARA RESOLVER, SE CONSIDERA:

En cuanto a la oportunidad y trámite del recurso ordinario de reposición, el artículo 242 del C.P.C.A, dispone que éste puede interponerse contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica y específicamente tratándose del proceso ejecutivo, el artículo 442 del C.G.P. consagra frente al cobro de obligaciones contenidas en una providencia que:

- “ ...
2. *Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, solo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida.*
3. *El beneficio de excusión y los hechos que configuren excepciones previas deberán alegarse mediante reposición contra el mandamiento de pago. (...)”*

Finalmente como quiera que el CPACA, nos remite al Código General del Proceso, resulta procedente revisar el artículo 318, que establece:

“ ...

El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia, el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres días siguientes al de la notificación del auto.

El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos...”
(Negrilla fuera de texto).

Por lo anterior, vemos en el presente asunto que el recurso de reposición es procedente, y en cuanto a la oportunidad se advierte que el auto que libró mandamiento de pago fue notificado a la demandada el 7 de marzo de 2018 (fl. 73), y el recurso se interpuso el 12 del mismo mes y año (fls. 76-88), luego se tiene que el recurso de reposición también fue oportuno, y por ende este Despacho pasará a resolverlo.

- Frente a la Caducidad

En relación con la caducidad, la inconformidad de la recurrente se traduce en el hecho de que este Despacho acoge el pronunciamiento expuesto por el Honorable Consejo de Estado Magistrado Ponente doctor William Hernández Gómez en auto de treinta (30) de junio de dos mil dieciséis (2016), en el cual se realizó el siguiente análisis:

i) En virtud del Decreto 2196 de 2009 y conforme las reglas fijadas en la providencia en cita, los términos de caducidad de las acciones frente a obligaciones a cargo de la entidad liquidada, fueron suspendidos desde el 12 de junio de 2009 hasta el 11 de junio de 2013, esto es, por espacio de cuatro (4) años.

ii) Terminada la liquidación se empieza el cómputo de los cinco (5) años con que contaba la demandante para formular la demanda ejecutiva, que se cuentan a partir del 12 de junio de 2013, es decir, que el plazo vencía el **12 de junio de 2018**.

iii) Como la demanda ejecutiva fue formulada por el demandante en sede judicial el 19 de abril de 2017 (fl. 10), se considera oportunamente presentada.

Sobre el precedente judicial y particularmente, frente a los argumentos expuestos en la mencionada sentencia y que fueron acogidos por el Despacho, es preciso advertir que la Honorable Corte Constitucional¹, ha señalado que el defecto fáctico de una providencia por desconocimiento del precedente, se configura cuando se omite aplicar una sentencia, o un conjunto de providencias anterior a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo.

Ahora bien, la Alta Corporación fijó los parámetros que permiten determinar si en un caso es aplicable o no un precedente. Así, la sentencia T-292 de 2006², estableció que deben verificarse los siguientes criterios: (i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; (ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso; y (iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente. Todos los cuales se cumplen en el caso que hoy nos ocupa y sobre el cual recae la inconformidad de la recurrente.

¹ Cfr. T-292 de 2006; SU-047 de 1999 y C-104 de 1993.

² Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 2006. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa.

Si bien es cierto, que aun cuando se encuentran cumplidos los tres criterios mencionados, los funcionarios judiciales tienen la posibilidad de apartarse del precedente, se requiere: (i) hacer referencia al precedente que van a inaplicar y (ii) ofrecer una justificación razonable, seria, suficiente y proporcionada, que dé cuenta de las razones por las que se apartan de la regla jurisprudencial previa³. Así, se protege el carácter dinámico del derecho y la autonomía e independencia de las que gozan los jueces.

En esa medida, este Despacho considera que al cumplir el pronunciamiento jurisprudencial invocado los requisitos planteados por la Honorable Corte Constitucional que en manera alguna exige que sea una sentencia de unificación, era dable acudir a lo allí expuesto y en esa medida se ratifica la decisión según la cual, no operó el fenómeno de caducidad.

- Indebida conformación del título y procedencia de la solicitud de intereses moratorios.

Ahora bien, manifiesta la defensa que la solicitud de cumplimiento fue presentada por fuera del término legal y por ende, no hay lugar al reconocimiento de intereses moratorios.

Por lo anterior, cabe traer a colación el inciso final del artículo 177 del C.C.A. que consagra:

“Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma”.

En el caso *sub lite*, la petición de cumplimiento fue radicada el 1º de agosto de 2008 (fl. 27) y la ejecutoria de la sentencia se dio el 21 de julio de 2008 (fl. 12), es decir, dentro de esos 6 meses siguientes a la ejecutoria, como lo consagra la mencionada norma, de manera que no le asiste razón a la entidad demandada.

- Claridad de la Obligación Exigida

Frente a los argumentos esgrimidos por la recurrente, en el sentido de la falta de claridad de la obligación contenida en la sentencia pues fue proferida en abstracto, y que se debía iniciar el incidente de concreción de condena el Despacho dirá que no le asiste razón a la apoderada, ya que la sentencia contiene en su parte resolutive una obligación clara de reliquidar la pensión de jubilación de la señora Olga María Medina Parra, en cuantía que señala la parte motiva de la sentencia, esto es, tomando como base el 75% promedio

³ Cfr., T-082 de 2011, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-794 de 2011, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y C-634 de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. En esta última, dicho en otras palabras se explica: “La Corte también refirió al grado de vinculación para las autoridades judiciales del precedente jurisprudencial emitido por las altas cortes. Resulta válido que dichas autoridades, merced de la autonomía que les reconoce la Carta Política, puedan en eventos concretos apartarse del precedente, pero en cualquier caso esa opción argumentativa está sometida a estrictos requisitos, entre otros (i) hacer explícitas las razones por las cuales se aparte de la jurisprudencia en vigor sobre la materia objeto de escrutinio judicial; y (ii) demostrar suficientemente que la interpretación alternativa que se ofrece desarrolla de mejor manera los derechos, principios y valores constitucionales. Esta opción, aceptada por la jurisprudencia de este Tribunal, está sustentada en reconocer que el sistema jurídico colombiano responde a una tradición de derecho legislado, la cual matiza, aunque no elimina, el carácter vinculante del precedente, lo que no sucede con otros modelos propios del derecho consuetudinario, donde el precedente es obligatorio, basado en el principio del stare decisis.”

mensual obtenido en el último año, incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados durante el año inmediatamente anterior a la adquisición del status, lo que indica que el valor de la liquidación no está determinado pero si es claramente determinable con una operación aritmética que debe realizar la entidad condenada⁴. Por otro lado, en cuanto a la aplicación del artículo 172 del C.C.A, no es posible al presente asunto, por cuanto éste hace referencia a cuantías que no hubiesen sido establecidas en el auto o sentencia, como por ejemplo el pago de frutos o mejoras, situación que no aplica para el caso debatido en este proceso ejecutivo, donde la obligación de pagar una suma de dinero está claramente definida en la sentencia.

- Falta de Legitimación por pasiva y No existencia de Título Ejecutivo Idóneo para Fundamentar el Mandamiento de Pago

En lo que concierne a la falta de legitimación por pasiva, argumento que también respalda la excepción de “No existencia de Título Ejecutivo Idóneo para Fundamentar el Mandamiento de Pago”, se debe resaltar, que en pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Boyacá⁵ se estudió ampliamente la legitimación por pasiva de la UGPP frente a las obligaciones reclamadas, fundamentándose en lo siguiente:

“Conforme al criterio establecido por la Sala de Consulta y servicio Civil del Consejo de Estado se entiende que en materia de liquidación de entidades públicas las obligaciones no pueden fraccionarse o escindirse a una entidad diferente que su sucesora procesal, en el presente caso al momento de liquidarse completamente CAJANAL, la entidad encargada de asumir las obligaciones fue la UGPP, por consiguiente debe ser la llamada como sujeto pasivo para el reconocimiento de la petición elevada por la parte actora. En tal medida se entiende que las acreencias relacionadas directamente con el sistema de seguridad social no pueden hacer parte del patrimonio en liquidación, por lo que debe ser asumida por la entidad que disponga el Gobierno Nacional para la administración de tales recursos, en el presente caso es la UGPP.”

Así las cosas, como quiera que es en la UGPP en la que radica la obligación de reconocimiento y pago de las sumas reclamadas, el Despacho DECLARARÁ NO PROBADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA.

- Competencia del Juez

Finalmente, frente a la señalada falta de competencia del Juez, es claro que la competencia le corresponde a este despacho atendiendo que el título ejecutivo objeto de recaudo es una sentencia condenatoria contra una entidad pública emanada de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, debidamente ejecutoriada, por lo que al tenor del numeral 6 del artículo 104 y concordancia con el numeral 1 del artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, este constituye un título ejecutivo exigible ante esta jurisdicción.

La regla general de competencia, se determina por el valor de la pretensión ejecutiva: si la cuantía excede de 1.500 S.M.L.M.V. corresponde a los Tribunales en primera instancia; si es igual o menor a dicha cifra, corresponde a los Juzgados, también en

⁴ Para tal efecto ver, Consejo de Estado, C.P. María Elena Giraldo Gómez, auto de 16 de septiembre de 2004, radicado bajo el número 26.726.

⁵ Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho N° 2. Proceso Ejecutivo. Demandante Bertha Mercedes Rincón de Rodríguez. Demandado: UGPP. Radicación: 150013333010 2015 00102 01. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Arciniegas Triana. Tunja, 17 de mayo de 2016.

primera instancia.⁶ Verificado el quantum del medio de control ejecutivo impetrado, no supera el límite establecido para que este despacho conozca del presente asunto en primera instancia, como se observa a folio 9 de la demanda.

Por el fuero territorial, el artículo 156 de la Ley 1437 de 2011 dispone que si se trata de ejecutivos contractuales corresponde al órgano jurisdiccional con competencia en el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato (núm.4) y la ejecución de sentencias o conciliaciones al Juez que profirió la providencia respectiva (núm. 9). Para el presente caso se observa que la sentencia que se tiene como base de la ejecución fue proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por tal razón tiene prevalencia la regla de competencia contenida en el artículo 155 numeral 7 de la Ley 1437 de 2011.

Frente a los intereses moratorios reclamados, resulta indispensable poner de presente una importante providencia proferida recientemente por el Consejo de Estado⁷ mediante la cual se definen cuáles son las diferencias entre el régimen de intereses de mora en el C.C.A y el CPACA. El alto Tribunal señaló que entre el régimen de intereses de mora del CCA y el del CPACA hay diferencias sustanciales en relación con la tasa y el plazo para pagar; además, la actuación por medio de la cual la entidad condenada realiza el pago depende del proceso o actuación judicial que le sirve de causa; la tasa de mora que aplica a una condena no pagada oportunamente es la vigente al momento en que se incurre en ella y la tasa de mora del CPACA aplica a las sentencias dictadas en procesos judiciales iniciados conforme al CCA, siempre que la mora suceda en vigencia de aquél. En resumidas cuentas Consejo de Estado concluye que conforme al artículo 308 del CPACA se deben atender las siguientes reglas:

"i) Los procesos cuya demanda se presentó antes de la vigencia del CPACA y cuya sentencia también se dictó antes, causan intereses de mora, en caso de retardo en el pago, conforme al art. 177 del CCA, de manera que la entrada en vigencia del CPACA no altera esta circunstancia, por disposición del art. 308.

ii) Los procesos cuya demanda se presentó antes de la vigencia del CPACA y cuya sentencia se dicta después, causan intereses de mora, en caso de retardo en el pago, conforme al art. 177 del CCA, y la entrada en vigencia del CPACA no altera esta circunstancia, por disposición expresa del art. 308 de este.

iii) Los procesos cuya demanda se presentó en vigencia del CPACA, y desde luego la sentencia se dicta conforme al mismo, causan intereses de mora conforme al art. 195 del CPACA."

El presente medio de control se encuentra enmarcado dentro de la primera hipótesis expuesta como quiera que la demanda se presentó en vigencia del CPACA, pero la sentencia (título ejecutivo) se dictó antes de su entrada en vigencia, caso en el cual se causan intereses de mora en el caso de retardo en el pago conforme al artículo 177 del C.C.A. Con base en lo anterior, se deberá declarar no probada la excepción planteada.

Por lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Tunja,

⁶El juicio por audiencias en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo Módulos de aprendizaje temas procesales generales Tomo II, pág. 300.

⁷ **CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA Consejero Ponente: Enrique Gil Botero** Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil catorce (2014) **Radicación:** 52001-23-31-000-2001-01371-02 **Demandante:** Lida del Carmen Suárez y otros **Demandado:** Instituto Nacional de Vías- INVÍAS- y otro **Referencia:** Acción de Grupo

RESUELVE

PRIMERO.- NO REPONER, el auto mediante el cual se libró mandamiento de pago, de acuerdo a lo señalado en la parte motiva.

SEGUNDO.- DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por lo expuesto en esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LAURA JOHANNY CABARCAS CASTILLO
JUEZA

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
DEL CIRCUITO DE TUNJA

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR
ESTADO

N³⁵ De Hoy 6 de julio de 2018
A las 8:00 a.m.

FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO

ms